



CSJ 758/2017

ORIGINARIO

Swift Argentina S.A. (antes JBS Argentina S.A.) c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 7 de Marzo de 2023

Vistos los autos: "Swift Argentina S.A. (antes JBS Argentina S.A.) c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de los que

Resulta:

I) A fs. 70/98 se presenta Swift Argentina S.A. (en ese momento, JBS Argentina S.A.), con domicilio en la localidad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, e inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realiza en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, por los períodos fiscales 11/2016 a 1/2017, en razón de no poseer su establecimiento productivo en esa provincia.

Señala que la pretensión que motivó la promoción de esta causa ha sido plasmada en el reclamo que le cursó la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, y en la notificación recibida correspondiente a la resolución DJRGDA-R n° 0011/2017, por medio de la cual se la intimó a abonar las sumas de dinero que de allí surgen, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

Puntualmente, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 22, inciso 2°, de la ley

10.324 (impositiva provincial), 5° de la ley local 9505 y 371 de la resolución normativa DGR 1/2011, en cuanto sostiene que dicha pretensión resulta violatoria de diversos derechos y garantías constitucionales, en particular de los artículos 4°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75, incisos 1°, 10, 13, y 126 de la Constitución Nacional.

Explica que Swift Argentina S.A. es una empresa que se dedica a la matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne en todo el territorio nacional, por lo que tributa el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral. Añade que sus plantas industriales se encuentran ubicadas en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe.

En ese contexto, concluye que la pretensión provincial constituye una invasión a las facultades exclusivas de la Nación para reglar el comercio (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional), como así también una restricción a la libre circulación de mercaderías, en tanto instaura una "aduanas interior" que vulnera lo prescripto por los artículos 8°, 9°, 10, 11, 31 y 75, incisos 1° y 10, y 126 de la Carta Magna. Considera, además, que se violan las garantías de igualdad y de razonabilidad (artículos 16 y 28 de la Ley Fundamental).

Por último, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

II) A fs. 101 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 105/106 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa, como así también hizo lugar a la medida cautelar oportunamente solicitada.

III) A fs. 150 se declaró extemporánea la contestación de la demanda de la Provincia de Córdoba y, a fs. 151, se procedió al desglose del escrito de fs. 118/149.

IV) A fs. 191 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza".

### Considerando:

1º) Que esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de las leyes locales 9505 y 10.324, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

Es sabido que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un "caso" que busque precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 310:606 y 977; 311:421, entre otros).

A la luz de lo expuesto, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

En consecuencia, es dable concluir que se han reunido los recaudos exigidos por el artículo 322 del código de rito, para la procedencia formal de la acción declarativa.

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco,



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, en su mérito, en el caso concreto, la aplicación de las leyes impositivas 9505 y 10.324, al gravar a la actora la actividad ya referida con la alícuota "residual" del 4,75%, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias (v. el formulario de notificación de la resolución DJRGDA-R 0011/2017, cuyas copias obran a fs. 11/13).

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Swift Argentina S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 5° de la ley 9505, 371 de la resolución normativa DGR 1/2011, 22 de la ley 10.324 de la Provincia de Córdoba, como así también la de la pretensión fiscal plasmada en la resolución DJRGDA-R 0011/2017. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Parte actora: **Swift Argentina S.A. (antes JBS Argentina S.A.)**, representada por los **Dres. Sebastián Grundy y Anabella Castro**, con el patrocinio letrado del **Dr. Eduardo Marcelo Gil Roca**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por la **Dra. Sonia L. Trinidad**.